

EL LARGO CAMINO DE LA REPARACIÓN EN EL NORTE DEL TOLIMA

Laura Astudillo Mesías

Universidad del Rosario

Escuela de Ciencias Humanas

Programa de Periodismo y Opinión Pública

Bogotá, mayo de 2016

El largo camino de la reparación en el norte del Tolima

Desde principios del siglo pasado, el norte del Tolima ha experimentado tres brotes de violencia que parecen repetir una preocupante historia de represión y persecución al campesinado.

El norte del Tolima, a pesar de haber sido un fortín de importantes frentes de las autodefensas, ha tenido una participación casi nula en el proceso de Justicia y Paz. Las estrategias para que las víctimas denuncien no han funcionado y todavía prevalece el escepticismo sobre las buenas intenciones del proceso. La desconfianza viene desde mucho atrás, pues históricamente han visto cómo la violencia los azota y vuelve cada vez con mayor contundencia, mientras los culpables salen impunes.

Detrás de los asesinatos selectivos y los desplazamientos masivos hay un interés por controlar tierras con un valor estratégico para el acceso al centro del país. Esto es algo que ha causado conflictos desde principios de siglo, que parecen repetirse con nuevos actores. Entender ese trasfondo es clave en un momento en el que se está planteando el posconflicto.



Mapa del norte del Tolima

La región es clave a la hora de entenderla violencia en Colombia. Su ubicación estratégica lo convierte en una zona crucial para controlar el tránsito hacia el centro y el norte del país. Desde la época de La Violencia se convirtió en un territorio en disputa, en el que han

hecho presencia prácticamente todos los grupos armados. La zona es extremadamente valiosa para la agricultura, gracias a sus tierras fértiles hacia el occidente y su potencial minero. Además, es un punto turístico en desarrollo, la zona oriental es el balneario favorito de los bogotanos, y hay un posible avance de proyectos para promocionar el Parque de los Nevados y las obras en homenaje a la tragedia de Armero.

Alirio Duque, historiador encargado de reconstruir el conflicto en el Tolima para el Centro de Memoria Histórica, cree que la región es un “laboratorio de guerra que ejemplifica los procesos de repetición de violencia”. Son varios los escenarios en los que la región se ha convertido en un campo de guerra en el que las principales víctimas han sido los campesinos, a pesar de que históricamente han gestado importantes movilizaciones sociales para reclamar sus derechos.

Al repasar tres brotes de violencia en la región, se pueden encontrar elementos repetitivos que muestran una falta de resolución de los problemas fundamentales de la comunidad que ha acabado por degenerar cada vez más el tejido social. El profesor de la Universidad del Valle, Pacífico Abella, resalta que las personas que han sido víctimas sienten que es legítimo usar los mismos medios violentos que ellos han sufrido. Por esto, cuando la represión sistemática de la organización campesina ha impuesto en la sociedad civil un miedo a funcionar como comunidad, se alimenta la percepción de que el cambio solo es posible a través de las armas.

Los primeros bolcheviques

En los años veinte, el norte del Tolima se convirtió en un bastión del socialismo en Colombia. De hecho, fue uno de los primeros lugares del continente en el que las ideas socialistas y comunistas se hicieron populares hasta el punto de amenazar al gobierno conservador de la época.

Por esos días, el municipio de Líbano era el mayor productor nacional de café, el fruto que sostenía en ese entonces la economía colombiana. A pesar de la intensa actividad económica, los campesinos se encontraban en condición de miseria y el desarrollo no se veía por ninguna parte. Fue así como varios grupos de la región comenzaron a identificarse con el Partido Socialista Revolucionario (PSR), que se inspiraba en la reciente Revolución Bolchevique. Los más radicales del movimiento gestaron una insurrección para tomarse el poder, coordinada con líderes del partido de otras regiones. Se hicieron llamar los ‘Bolcheviques del Líbano’, inspirados en su admiración por la Revolución Rusa.



Producción cafetera en Libano, años 20.

El 28 de julio de 1928, 300 hombres armados se tomaron el pueblo, convencidos de que estaban siendo parte de una revolución nacional. No se habían enterado que la Dirección General del PSR había cancelado las acciones bélicas, pero la orden no pudo llegar al Libano por problemas de comunicaciones. Además, los bolcheviques no contaban con la preparación militar para enfrentar al Ejército y fueron rápidamente superados y apresados.

Como eran centenares los presos por rebelión, finalmente se les otorgó el perdón a los 'Bolcheviques del Libano' y no continuaron con su acción política radical. Sin embargo su recuerdo se mantuvo en la memoria colectiva de la población civil. Incluso inspiró a la guerrilla del ELN, que en honor a los hechos del 28 bautizó como 'Bolcheviques del Libano' al frente que fundó en el norte del Tolima.

Un eje central de La Violencia

Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el gobierno central conservador de Mariano Ospina Pérez tomó la decisión de aplacar definitivamente las protestas por el magnicidio del líder liberal. Le dio legitimidad a la policía para exterminar a sus contendores políticos. Tolima, hasta hoy, es un territorio de tradición liberal, lo cual agravó el conflicto en la zona. Por todo el departamento se comenzaron a formar grupos armados de campesinos para defender ideales liberales, al igual que otros que apoyaron la labor de la que se conoció como la policía 'chulavita' conservadora, fuerzas militares gobiernistas que son recordadas por sus brutales crímenes en contra de los opositores.

La prevalencia liberal de los campesinos tolimenses propició que el norte del Tolima fuera la cuna de una fuerte oposición a los conservadores, liderada por 'Sangrenegra', 'Desquite' y 'Pedro Brincos'. Estos tres personajes son de los 'bandoleros' más recordados de la época de La Violencia. En sus tierras, eran considerados héroes y contaban con la legitimidad de los campesinos acosados por los 'chulavitas' e incluso del Partido Liberal, completamente aislado del poder.

Estos primeros grupos armados liberales y socialistas se forjaron motivados por la venganza, como se describe en el libro de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens: *Bandoleros, gamonales y campesinos*. Las historias de origen de los grandes 'bandoleros' de la región dan cuenta de vidas marcadas desde muy temprano por la violencia. 'Sangrenegra', que venía de una familia conservadora, cambió de bando tras ser perseguido por la muerte de un hijo de un líder conservador. Al ver a su partido persiguiéndolo, decidió enfrentarlos. 'Desquite', por su parte, buscaba vengar la muerte de su padre y hermano a manos de la fuerza pública, como indica su nombre. Sus cuadrillas de hombres armados comenzaron a conocerse como guerrillas.



Registro de El Tiempo de la muerte de 'Sangrenegra'

Las sangrientas prácticas de los conservadores generaron un resentimiento palpable en la población del norte del Tolima, que se alimentaba con la propagación de historias por parte y parte. Los rumores de tomas guerrilleras a pueblos llevaron a políticas más represivas de los gobiernos y la fuerza pública. Esto propició hechos como los sucedidos durante el entierro en Líbano de Antonio Almanza en 1951, en el que en medio del funeral, la policía disparó a los asistentes. En retaliación, la guerrilla liberal empezó a perseguir conservadores, incluso llegando a asaltar en 1952 a una comisión del Gobernador.

En un esfuerzo por calmar los enfrentamientos de la zona, se aumentó el pie de fuerza en el norte del Tolima, propiciando un éxodo masivo de campesinos que dejaron todo en búsqueda de tranquilidad. El impacto del fenómeno de La Violencia en el departamento fue tal, que fue el primero en intentar contabilizar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La Secretaría de Agricultura estimó unos 16.219 muertos en su informe, realizado en 1959. Cabe aclarar que esa investigación no incluyó las masacres selectivas y las muertes a manos del Ejército, lo cual significa que no tuvo en cuenta la mayor parte de la acción violenta conservadora. También estima que el 42.6% de la población tolimense, 321.621 personas, tuvieron que abandonar sus hogares. Unas 34.304 casas fueron quemadas y las tierras ocupadas dejadas a su suerte, para luego ser tomadas por grandes terratenientes.

Relatos de la época, como el del dirigente liberal Luis Eduardo Gómez, dan cuenta de la enorme crisis social que causó este enfrentamiento político. Describió una avanzada de la fuerza pública en abril de 1952 como una “operación punitiva ya en grande”. Explica que regiones enteras fueron devastadas y calcula los muertos entre seis y ocho mil. Este testimonio, que habla de un único combate en contra de los liberales, muestra que las estadísticas no son confiables, tanto porque afectaban intereses políticos como por las infinitas dificultades para la recolección de datos. Un informe de la MOE estableció una cifra de 35.298 muertos en el Tolima durante La Violencia.

Las intenciones de los denominados bandoleros de contener semejante daño les valieron el apoyo de los campesinos y establecieron al norte del Tolima como un epicentro de resistencia. Incluso, ‘Pedro Brincos’ intentó formalizar su organización con el soporte de dirigentes liberales. También estableció un sistema de ‘cuotas’, con el cual le aseguraba protección a los terratenientes que cumplieran con aportes económicos. Estas prácticas, compartidas por los conservadores, terminaron evolucionando en el sistema de extorsiones con el que tradicionalmente se han financiado los grupos armados colombianos.

A gran escala, las disputas en el norte del Tolima tenían detrás una lucha por la tierra, que era próspera en producción cafetera. De hecho, el Líbano fue uno de los principales productores cafeteros del país, con mucha producción a pequeña y mediana escala. La fuga de campesinos en masa permitió la apropiación del terreno y por ende, de uno de los negocios más lucrativos de la época.

La llegada de Rojas Pinilla al poder en 1953 reprimió las expresiones de violencia, gracias al aumento en el pie de fuerza militar. Se firmó un acuerdo de paz con las guerrillas liberales, pero realmente no se puso en práctica. En los años de Rojas Pinilla hubo un

aumento en la violencia y el desplazamiento, que no cesó hasta la entrada en vigor del Pacto de Benidorm que estableció el Frente Nacional.

Los grupos liberales más radicales, nunca dejaron las armas ni se sometieron al Estado. Eventualmente se establecieron en el sur del Tolima, continuando con su actividad criminal en las montañas, lejos del acoso del Ejército. Allí, en el pequeño corregimiento de Marquetalia, se formaron enclaves agrícolas que fueron denunciados por el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado como “repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”. Esto dio pie a la llamada Operación Soberanía, en la que el Ejército intentó recuperar el territorio a la fuerza durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Los sobrevivientes de la Toma de Marquetalia escaparon más al sur y radicalizaron su posición en contra del poder. Finalmente, en 1966 se formalizaron como guerrilla y adoptaron el nombre de las Farc. Al ser el lugar del que surgieron, el Tolima se convirtió en uno de los departamentos con mayor presencia de este grupo armado.

Se gesta una nueva violencia

La finalización del periodo de La Violencia dejó al campo colombiano en una tensa calma. La reorganización del país, propiciada por los desplazamientos masivos, centró el desarrollo en las urbes y dejó aún más relegadas a las zonas rurales. Para el Tolima, esto significó la expansión de la guerrilla, que valoraba la zona especialmente por ser el sitio de su fundación.

Al mismo tiempo, otras fuerzas buscaban hacer presencia en la zona, que, a diferencia de otros lugares de dominio de la guerrilla como la Orinoquía, contaba con vías de acceso y un desarrollo de infraestructura que podía aprovecharse para la agricultura y el turismo. Además, la presencia de las Farc y la posterior llegada de nuevas guerrillas como el ELN –de origen estudiantil y con un pensamiento de izquierda radical marxista-leninista– y el ERP –facción marxista-maoísta del ELN con pocos combatientes–, llevaron a la devaluación de la tierra en la región.

Un nuevo actor llega a la zona con la emergencia de los grandes narcos a principios de los años ochenta. El norte del Tolima se convirtió en la perfecta oportunidad de negocio para ellos. Aprovechando la desesperación de los campesinos por salir de la amenaza guerrillera, compraban sus tierras a bajos precios. Después, formaban sus propios grupos armados para recuperar el control de la zona y valorizaban el terreno. Un informe diagnóstico de la Misión de Observación Electoral (MOE), habla de cómo grandes capos del Valle, los hermanos Ochoa –segundos al mando del Cartel de Medellín– y el cuestionado esmeraldero Víctor Carranza se hicieron con grandes extensiones de tierras tolimenses, principalmente en el norte.

La apropiación de tierras se exacerbó también por motivos naturales. En 1985, una avalancha sepultó el municipio de Armero, uno de los más prósperos de la región. En pocas horas la población fue borrada del mapa, dejando aproximadamente 25 mil muertos. El terreno inhóspito fue declarado Campo Santo y se prometió la construcción de un parque memorial. Sin embargo, un par de años después comenzaron a proliferar cultivos y se llenó de ganado. Las tierras de Armero se las adueñaron aprovechando que nadie hizo nada con ellas, ya fuera porque confiaban en que el Estado las protegería o porque no quisieron volver de nuevo tras el impacto de la tragedia.

Hoy, 30 años después, todavía es incierto quiénes son los dueños y qué va a pasar con las propiedades armeritas. Según una investigación de la Revista Semana, apenas en 2014 el Instituto Agustín Codazzi reconstruyó los planos del área urbana y en 2015 se anunció que la Superintendencia de Registro y Notariado creará un registro único de propietarios. La tarea será compleja pues todos los registros previos fueron arrasados en la avalancha.

La revolución cafetera

Sumado a la presencia de grupos armados en sus tierras, los campesinos del norte del Tolima vieron amenazada a su principal forma de sustento. El fin del Pacto Internacional del Café en 1989 había devastado a la industria cafetera. La terminación de la regulación internacional de la producción, que retenía parte de las cosechas para controlar los precios, llevó la cotización del grano a los niveles más bajos de la historia.

La apertura económica del gobierno Gaviria perjudicó enormemente a los cafeteros, pues causó una revaluación del peso que aumentó sus gastos. El aumento de las importaciones y el florecimiento de nuevas industrias desbancaron al café como la industria insignia de la economía nacional. Los cafeteros dejaron de ser protegidos por el Estado, que históricamente los había favorecido con subsidios, facilidades de pago y apoyo para investigación y tecnificación. Sus créditos fueron cedidos, por iniciativa gubernamental, a la banca privada.

La entrada al mercado internacional y a la libre competencia fue muy dañina para los campesinos. El mercado internacional tenía una sobreoferta y a pesar de haber aumentado las exportaciones en un 33 por ciento, las ganancias para los cafeteros disminuyeron. El comienzo de los noventa también llegó con la broca y la roya. Los campesinos nunca habían tenido que lidiar con cultivos infectados, así que la Federación de Cafeteros propuso planes de exterminación y fumigación. El problema es que requerían aumentar la inversión en fertilizantes y cambiar la variedad de café cultivada.

Para 1995, los pequeños y medianos productores se encontraron entonces en una terrible encrucijada: se comprometían a mayores deudas que no podían pagar o perdían su

producido. Según una investigación de la Universidad del Tolima publicada en el libro *Para Vencer el Miedo*, Líbano había 743 deudas vencidas con la Caja Agraria. La mitad iban encaminadas a procesos de embargo, a pesar de que el 68 por ciento de los préstamos eran de cantidades menores a los cinco millones de pesos. No poder cumplir con sus obligaciones ahuyentó a parte de la población. Otros comenzaron a entender que la crisis cafetera estaba por llevarlos a la ruina, y se propusieron unir a los campesinos en búsqueda de una solución.

Uno de los testimonios más recordados de las movilizaciones es el de Amanda Soto, quién hasta hoy es un personaje de referencia en el Líbano. Se estableció en la región desde 1966 y tuvo que encargarse de su pequeña finca y sus siete hijos tras la muerte temprana de su esposo. Ella describe la ingenuidad con la que los campesinos se enfrentaron a las complejidades del mercado mundial. Llegó el día en que los costales de café que bajaba de su vereda no cubrieron como siempre su deuda al banco y un modesto mercado. Se quedó allí, encartada con su propio producido que ya no le daba ni para vivir y mucho menos para responder ante sus acreedores.



Registro de la primera movilización en Líbano.

En una conversación con otro ‘cafecito’, como llama a los otros productores, ella le preguntaba cómo es que debían enfrentarse a las fluctuaciones de precio que nunca parecían favorecerlos. Le decía que no entendía cómo protestaban estudiantes y profesores, pero que los campesinos nunca se manifestaban en contra del gobierno. El hombre le preguntó que si estaba de acuerdo con una rebelión campesina y ella

respondió: “Claro, yo me comprometo”. La citaron para una reunión semanal que cada vez aumentaba más en asistencia.

Por medio de reuniones informales fueron comunicando de vereda en vereda que la crisis era compartida y que algo tenían que hacer al respecto. Surgieron un par de líderes y por medio del voz a voz establecieron un punto de partida: se movilizarían el 18 de febrero de 1995.

Pocos creían en el poder de convocatoria del Paro Cafetero, que empezó tímidamente con arengas de líderes en el parque principal de Líbano. Primero invitaron a los curiosos a unírseles y luego se comenzó a regar el rumor a las veredas y pueblos vecinos. Para el siguiente día ya había cientos de personas en la plaza que no permitieron que la Policía y el Ejército disolvieran la protesta. Los campesinos se declararon en cabildo abierto y permanecieron en improvisadas carpas en la mitad del pueblo por 19 días.

El éxito de la movilización animó a los campesinos a organizarse formalmente en la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima (Asopema). Lograron reclutar a líderes de todo el norte del Tolima y se propusieron protestar de nuevo, esta vez a mayor escala. En julio de 1995 llegaron al Parque Murillo Toro de Ibagué unos mil campesinos en respuesta a la convocatoria de Paro Nacional. En la mayoría de las ciudades las manifestaciones se disolvieron al día siguiente, pero la liderada por Asopema se mantuvo por dos meses.

Los recuerdos de esos momentos están llenos de nostalgia. Germán Bedoya, uno de los líderes de Asopema, valora el sentido de comunidad que permitió el desarrollo de ambas manifestaciones. Los comerciantes les donaban comida y todos los participantes aportaron lo poco que tenían para poder sobrevivir a la intemperie, lejos de su tierra y sus familias. Sin embargo, eran conscientes que esta batalla estaría llena de obstáculos. “Creamos Asopema con la plena seguridad de que su gestión pondría nuestras vidas en peligro”, confiesa Bedoya.

El Paro Nacional de 1995 atrajo la atención nacional y puso a Asopema como protagonista de la inconformidad campesina. Los líderes comenzaron a involucrarse con organizaciones sociales de envergadura nacional, sindicatos y organizaciones estudiantiles. Se sentaron a la mesa de negociaciones con el gobierno Samper, lideradas por su ministro del Interior, Horacio Serpa. Lograron su cometido, con el compromiso estatal de condonar deudas, invertir en el campo y proteger los derechos humanos de los campesinos.

La firma del acuerdo con el gobierno también vino con el que fue el primer golpe violento a Asopema. En una movilización en Bogotá murió de un disparo en la cabeza Fernando Lombana, uno de los precursores de las marchas. Germán Bedoya cuenta que, a pesar de

su juventud, fue de los más férreos defensores de las movilizaciones. En la primera marcha de Líbano se plantó ante los policías que no querían permitir la entrada al parque principal y afirmó que allí se quedarían. Pronunció una frase que tristemente se convertiría en una sentencia: “Si alguien ha de morir, que sea yo el primero”.



Protestas en Líbano tras la muerte de Fernando Lombana.

Según la Policía, la manifestación se tornó violenta porque los campesinos se movilaron y tenían autorización solo para concentrarse cerca al Concejo de Bogotá. Negaron que fueran responsables de los disparos, pues la fuerza que enviaron no estaba armada sino con bolillos. La muerte de Lombana se atribuyó a la confusión de la protesta, pero varios exmiembros de Asopema aseguran que un miembro de la fuerza pública lo ajustició en plena calle 26. En su momento se pidió una investigación mayor de los hechos pero hasta hoy no se han aclarado las circunstancias de la tragedia.

El comienzo del fin

El fin del paro resultó no ser el gran triunfo que se había imaginado Asopema. Al regresar a sus pueblos, los campesinos se encontraron de frente con la broca, que a pesar de las mejores condiciones económicas no tuvo piedad con los cultivos. Amanda Soto cuenta que tenían miedo de cultivar cualquier producto, y que entonces quedaron sin saber qué hacer. “Estábamos como un niño cuando se le pierde la mamá”, cuenta.

No obstante, las dificultades para realizar actividades agrícolas quedaron en un segundo plano cuando se complicó la situación de seguridad en la zona. El norte del Tolima no era ajeno al conflicto, pero lo que se vendría sería comparable con lo ocurrido durante La Violencia.

La zona a principios de los noventa era dominada por el ELN, que llevaba aproximadamente una década en el lugar. Habían llegado con intenciones de expandirse en el centro del país. Se ganaron a sangre y fuego los corregimientos de Santa Teresa y Delicias de Líbano, tras una intensa confrontación con las Farc y el ERP. Para la época del Paro Cafetero ellos ejercían un cómodo control en la zona, donde se financiaban por medio de secuestros y extorsiones al comercio. El frente del norte del Tolima fue llamado 'Bolcheviques del Líbano', en honor a la insurrección campesina de los años veinte. No era un frente particularmente activo militarmente. Se centraba más en mantener su presencia ya ganada por medio de intimidación y se encargaba de la planeación y entrenamiento de las células urbanas de la guerrilla que actuaban en Bogotá, aprovechando su cercanía a la capital.

La presencia de esta guerrilla fue usada en contra de los campesinos por motivos políticos, tanto por el Gobierno como el mismo ELN. Se dijo que Asopema estaba infiltrada por los 'elenos' para ser un brazo político que apoyara su lucha armada. La guerrilla, en comunicados oficiales, se atribuyó la organización del movimiento como una muestra de su lucha por la zona, además de afirmar que colaboró con la construcción de caminos e infraestructura para compensar el abandono del Estado.

Estas afirmaciones terminaron por condenar a Asopema como organización social. Le quitaron su legitimidad como movimiento social, sirviendo de excusa a organizaciones paramilitares para atacarlos porque "eran guerrilleros". Por otro lado, desestimaron el acoso sufrido por parte del ELN, que no solo puso a los campesinos en medio de combates para establecerse en la zona, sino que sistemáticamente vivió a costa de los habitantes de la región.

Asopema tuvo indiscutiblemente contacto con el ELN. Operaban en las mismas zonas y compartían ideales de izquierda. Germán Bedoya confirma estos contactos y confiesa que ciertos líderes se sentían identificados con su lucha, en especial después de sentirse traicionados por el gobierno. No obstante, también afirma que Asopema se acercó mayormente al ELN para interceder por los campesinos que no podían ceder ante sus pretensiones de dinero, víveres y ayudas.

En el resto de Colombia, el segundo lustro de los años noventa fue el momento de expansión de los grupos paramilitares. Para la época se conformaron las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC) que reunían a diferentes grupos armados que funcionaban desde los años setenta como efectivos contraguerrilla. Estos grupos, que comenzaron siendo auspiciados por la fuerza pública como un servicio civil de seguridad, terminaron convertidos en ejércitos privados del narcotráfico. Su unificación fue propiciada por los hermanos Castaño, clan familiar que controlaba las fuerzas paramilitares en Córdoba y Uraba.

La facción de los Castaño, que era la más fuerte dentro de las AUC, comenzó a interesarse en llegar formalmente al Tolima para expandir su poderío en el centro del país y por una razón geográfica clave: el Cañón de las Hermosas. Ubicado en la Cordillera Central, en el sur del Tolima, era un enclave de las Farc y la principal zona de cultivos de amapola del país. Controlar la zona significaba manejar el lucrativo negocio de la heroína, que se proyectaba como la mayor oportunidad de ganancia para el tráfico de drogas en esa época.

Para 1998, los grupos paramilitares del Tolima, que se hacían llamar Autodefensas del Tolima, se adscribieron a las AUC. En los tres años siguientes llegaron al departamento desde el norte las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que fundaron en la región el Frente Omar Isaza (FOI) y desde el sur el Bloque Centauros. En poco tiempo tomaron control de prácticamente toda la zona al norte de la carretera de la Línea.

Los paramilitares aprovecharon que las Farc se habían replegado hacia el sur, buscando concentrar sus tropas en la Zona de Distensión que en el Caquetá se desmilitarizó durante el proceso de paz del gobierno Pastrana. En el norte del Tolima se enfrentaron principalmente al ELN, que aunque logró sobrevivir, fue prácticamente derrotado. Lograron infiltrar todas las esferas de la sociedad tolimense, controlando el comercio, la política y las actividades del narcotráfico en la zona.

Tiempos de confusión

Yohana Castaño era apenas una niña cuando comenzaron a llegar los paramilitares. Ella creció en la vereda Santa Teresa, territorio del ELN, hasta la muerte de su madre. Se trasladó entonces a casa de unos familiares en el centro de Líbano. Apenas a una cuadra inauguraron una estación de Policía. Allí conoció por primera vez la guerra.

La estación era frecuentemente el blanco de ataques de la guerrilla. En la casa de Yohana tenían que cambiar los vidrios y vivir asustados con las explosiones que se daban en pleno centro del pueblo. Ya a finales de la década de los noventa cambiaron los perpetradores y la violencia se tornó contra la sociedad civil. Yohana recuerda que las primeras víctimas venían de los sectores más pobres. Aparecían muertos indigentes y aquellos que se rumoraban eran drogadictos o ladrones. Comenzaron a patrullar la zona hombres

extraños, armados, que se presentaban como una especie de vigilantes que querían eliminar el crimen de la región. Su estrategia era controlar todas las esferas sociales, desde el poder político hasta la vida cotidiana de los ciudadanos.

La avanzada por el poder de los paramilitares veía en los campesinos, en especial aquellos organizados en movimientos sociales, un obstáculo para su idea del poder absoluto. Ellos incomodaban especialmente las alianzas con terratenientes y políticos, pues cuestionaban sus planes de desarrollo a largo plazo como la megaminería y las grandes centrales energéticas. La estrategia se convirtió entonces en eliminarlos como amenaza.

Los campesinos no tardaron en notar que el ambiente se tornaba cada vez más tenso. Amanda Soto recuerda que le llegaron rumores de grupos que ponían plazos para abandonar las tierras. Al principio, no parecía nada grave, al fin y al cabo ya estaban acostumbrados a las intimidaciones por la presencia guerrillera. Cuando aparecieron los primeros muertos, la población vio que se enfrentaban a una organización extremadamente violenta que atacaba estratégicamente para sembrar el miedo y cortar con las actividades comunitarias que promovieran la formación política. Su excusa era que las organizaciones campesinas no eran más que expresiones guerrilleras.

Los paramilitares que llegaron venían del Magdalena Medio, herederos de la doctrina del temido Ramón Isaza, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). Este personaje se forjó como leyenda criminal al declararle una guerra abierta a Pablo Escobar por el narcotráfico en su zona de influencia. A pesar de haber perdido a un hijo y casi una decena de familiares a manos del capo paisa, Isaza sobrevivió y consolidó su poder en su región, armando un poderoso ejército personal que luego se expandió en numerosos frentes que asignaba a su familiares. Cada uno de sus hijos fue nombrado comandante y según su versión para Justicia y Paz, actuaban a su parecer en su territorio. Sin embargo, los procesos han probado que él mantenía el control sobre sus hombres y por eso tuvo que responder por masacres en el norte del Tolima, incluyendo la de 'Los Pescadores' y la de 'Los Cazadores'. En el norte del Tolima, las ACMM delinquían como el Frente Omar Isaza, en honor al hijo mayor de Ramón, muerto en extrañas circunstancias. Lo comandaba Walter Ochoa Guisao, alias 'Gurre', protegido desde niño de la familia Isaza.

Su llegada a imponerse en la región no fue tan bienvenida por las fuerzas paramilitares que allí ya existían. El Bloque Tolima de las AUC no llegó desde otra región sino que fue la formalización de organizaciones armadas de la zona que funcionaban como Cooperativas de Vigilancia y Seguridad, las ya infames Convivir. Estas eran servicios de seguridad privada de los hacendados, autorizadas por el Estado, que actuaban en contra de la guerrilla para tener seguridad en sus tierras. Pidieron a Carlos Castaño el financiamiento

para funcionar conjuntamente en el Tolima, bajo el mando de alias 'Elías el Viejo', quien murió en 2002. Su reemplazo fue Diego Martínez Goyeneche alias 'Daniel', quien fue el comandante bajo el cual se desmovilizaron en el proceso de Justicia y Paz.



Omar Isaza, máximo líder del FOI, quien fue reciente liberado tras cumplir los ocho años de condena estipulados en Justicia y Paz.

Las AUC usaban esa estrategia para expandirse, funcionando de manera similar a las franquicias comerciales. Aportaban recursos y modelos de operación, pero cada bloque operaba bajo el mando de un comandante local que tenía vía libre para tomar decisiones. El mando en Tolima también lo compartía Miguel Arroyave, narcotraficante y comandante del Bloque Centauros, otra franquicia de los Castaño que se expandió desde los Llanos hacia el norte. Según testigos de procesos de parapolítica e investigaciones del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, pagó cuatro millones de dólares para hacerse con el control del Bloque Tolima.

La presencia de ambos grupos estuvo siempre marcada por las rencillas por el control territorial. El portal Verdad Abierta confirma que varias veces tuvo que intervenir Carlos Castaño para mediar entre los intereses de estos dos grupos. La unidad de investigación de Justicia y Paz confirmó en sus investigaciones que se dieron incidentes entre comandantes, robo de dineros y hasta asesinatos, que luego fueron desmentidos por ellos. La versión oficial de los paramilitares fue que se realizaron negociaciones para que el Frente Omar Isaza cediera terreno al Bloque Tolima.

La estrategia paramilitar

Los frentes se instalaron en la región con una gran cantidad de recursos. Contaban con un enorme terreno en Líbano, en el cual funcionaba una base para ejercicios militares, que como recuerda Yohana Castaño, “no tenía que envidiarle a un batallón del Ejército”. El movimiento alrededor de sus propiedades era furtivo y secreto, se tenía prohibido a los pobladores acercarse. En el corregimiento de Santa Teresa se prohibió la entrada al cementerio local. Alirio Duque, en sus recuentos para la Comisión de Memoria Histórica, descubrió que después de un enfrentamiento con el ELN, los vecinos encontraron rastros de que allí delinquía un grupo de veinte paramilitares que comía y dormía encima de las tumbas.

Las más grandes acciones militares en el norte del Tolima fueron en contra del ELN. En varias ocasiones la población se vio en medio del combate. Ocurrieron sucesos como el de la Hacienda La Aurora, en el que 200 personas salieron en la mitad de la noche al casco urbano de Líbano en medio de la zozobra, dejando sus tierras abandonadas. La Alcaldía tuvo que organizarlos en un salón comunal y luego convencerlos para volver en los días siguientes. En este caso se logró el regreso, pero en muchas ocasiones los pobladores preferían huir. En el departamento, los grupos armados se disputaban el control de 17 municipios en 2002, la mayor cantidad desde la época de La Violencia.

La cifra de muertos por combate es un enigma que probablemente nunca se resolverá. Realmente no hay un archivo de los enfrentamientos de grupos ilegales y las vidas que cobraron. Solo quedan mitos de los pobladores, que hablan de combates en los que salían camiones llenos de cuerpos que luego entraban a sus bases. “¿Quién sabe quiénes eran?”, dice Isabel Cristina Pardo, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en el Tolima, “es muy probable que esas propiedades privadas estén llenas de fosas comunes que permanecerán en el olvido”. Las cifras oficiales confirman un terrible aumento en la violencia durante el pico de actividad de los paramilitares.

En 2002, los asesinatos selectivos se doblaron, pasando de cerca de 100 a aproximadamente 200 en un año. Esta era la modalidad preferida para infundir temor a las personas. Se fijaban en líderes comunales, en aquellos que movieran grupos grandes, que defendieran iniciativas sociales. Los que plantearan protestas o mostraran pensamientos de izquierda eran blancos definitivos, se reprimía cualquier tipo de denuncia. Si alguien se oponía a su dominio, así fuera en lo más mínimo, era castigado. Estaban metidos hasta en las riñas personales. “Cuando había una pelea amorosa, el comandante era informado y determinaba cómo castigar a los involucrados. Enviaba a los adúlteros a arreglar vías o a hacerle trabajos. Al que se negara se le ampliaba

el castigo y usualmente se lo ponía de ejemplo con el resto de la gente”, cuenta Yohana Castaño.

Hoy, ella lidera iniciativas sociales en el departamento, como miembro del Congreso de los Pueblos. Todavía recuerda con desprecio cómo los grupos ilegales se convertían para algunos en agentes de progreso ante el abandono del Estado. “Todavía me decepciona ver cómo las iniciativas de los ‘paras’ para reparar vías o trabajar en obras convocaban mucha gente, mientras que el trabajo para organizar socialmente a los campesinos era casi imposible. Así de grande era el miedo que infligían”, explica.



Yohana Castaño, hoy miembro del Congreso de los Pueblos.

Según la MOE, el desplazamiento en el Tolima se cuadruplicó en 2001, alcanzando casi 23 mil personas. Entre 2004 y 2006, mientras el gobierno Uribe negociaba con los ‘paras’ se desaceleró el éxodo, pero al terminar las desmovilizaciones, las cifras de desplazados volvieron a alcanzar las de principios de siglo. Cifras de Acnur, específicas al norte del Tolima, calculan que en Líbano hubo 2.087 expulsados entre 2003 y 2006, convirtiéndose en el quinto municipio con más desplazamiento del departamento. Además, fue el centro de llegada de los expulsados del norte, recibiendo al cinco por ciento de los desplazados tolimenses en su casco urbano. Considerando que la población del municipio era de unos 40 mil habitantes, se puede decir que uno de cada veinte habitantes del Líbano fue desplazado por la violencia. Eso sin contar que las cifras de organizaciones sociales se refieren a refugiados que se han identificado y registrado como tales, excluyendo a aquellos que no se reconocieron oficialmente.

El control social se daba también a partir de redes de informantes. Los comandantes invitaban a la gente a “denunciar”, para que ellos pudieran “hacer justicia”, lo cual los ponía de su lado. Muchos accedían como método de protección, otros se vieron tentados por la oferta y aprovecharon para denunciar sin fundamento para deshacerse de enemigos personales. Isabel Cristina Pardo dice que este tipo de situaciones han perjudicado las denuncias por Justicia y Paz: “Mucha gente quedó envuelta en el juego de la guerra, se vendió a algún bando y contar la verdad la haría enfrentarse con el hecho de que, por las circunstancias, terminó siendo cómplice de los victimarios”.

Las condiciones en las que se realizaban los asesinatos estaban fríamente calculadas para impactar a la gente. Usualmente se desaparecía a las personas por un par de días y los cuerpos aparecían con signos de brutales torturas y siempre en sitios visibles, como cruces de caminos, con letreros que indicaban que eran guerrilleros. Antes del golpe, las víctimas sufrían de un intenso acoso, con llamadas y mensajes amenazantes. Luego, procedían a los ultimátum para que salieran de sus tierras, casi siempre acudiendo a sus familiares cercanos para “prevenirlos” del peligro que acechaba a su ser querido. Ya los campesinos sabían que si les daban un plazo específico, probablemente llegarían antes.

Los crímenes de los paramilitares pudieron llegar a estas dimensiones porque contaban con aliados en la fuerza pública y el poder local. El escándalo de la parapolítica puso en evidencia cómo la clase dirigente llegó al poder con financiamiento y apoyo de estos grupos, respaldados económicamente a su vez por empresarios, terratenientes y narcotraficantes. En el caso del Tolima, se abrieron procesos contra alcaldes, concejales y líderes políticos. Las condenas a políticos más relevantes incluyeron a Emilio Martínez, expresidente de la Cámara de Representantes, quien también fue acusado de mal manejo de recursos públicos. Hoy su curul la ocupa su hermana Rosmery, que es considerada su heredera política. Tal vez la condena de mayor repercusión mediática en el Tolima fue la de Luis Humberto Gómez Gallo. El que fuera presidente del Senado cumplió una condena de cinco años, gracias a rebajas de pena, y falleció en 2013 de un infarto. Varios testimonios confirmaron su relación con Eduardo Restrepo Victoria, alias 'El Socio', narcotraficante que financiaba al Bloque Tolima que fue extraditado en 2007 a Estados Unidos.

Sin embargo, parece que las condenas se quedaron cortas y muchos de los facilitadores de los ‘paras’ lograron salir impunes de sus relaciones peligrosas. A Mauricio Jaramillo, líder liberal que continúa activo en la política de la región, se le abrió una investigación preliminar en 2008 que hasta hoy no ha tenido ningún avance. Varios desmovilizados han denunciado a Javier Sandoval Buitrago, contratista de la región, como financiador en Fresno para la creación del Bloque Tolima. El testimonio más recordado es el de Pedro

Pablo Hernández, alias 'Pedro Pum Pum', uno de los mandos medios de la organización, quien en entrevistas y su versión libre afirmó que Sandoval buscó a alias 'Gurre' para que intimidara a los vecinos de su finca para irse y poder adueñarse de sus propiedades. Apodado 'El Morrongo', Sandoval era reconocido en la región porque había pasado de ser un conductor de acarreo a uno de los mayores contratistas del departamento, con contratos con la Policía, el Inpec y el ICBF para proporcionar suministros. El aporte del empresario a las autodefensas también fue denunciado en las versiones libres de Alexander López Acosta, alias 'X' y Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias 'Elkin', que añadieron que él les sugería a las personas que podían extorsionar. Por estos testimonios, la Fiscalía le abrió un proceso que precluyó en 2010 por falta de pruebas.

Con respecto a la participación de la fuerza pública, no se han abierto procesos contra ninguno de sus miembros en la región. La comunidad siempre ha mantenido que eran cómplices de las acciones paramilitares, en especial por omisión. Todos sus crímenes parecían quedar impunes y ser ignorados y la falta de acción es innegable, en especial porque en muchos casos ya estaban avisados de lo que iba a ocurrir. Hay artículos de 2002 que dan cuenta de organizaciones sociales como Sembrar y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos estaban enviando alertas tempranas sobre el acoso paramilitar y el aumento de los asesinatos selectivos.



Diego Martínez Goyeneche, alias 'Daniel', jefe del Bloque Tolima asesinado en la cárcel.

En su versión libre, alias 'Daniel', comandante del Bloque Tolima, nombró como colaboradores a miembros de la Policía en el Tolima, de Inteligencia del Batallón Rooke en Ibagué, del CTI y de la Fuerza Aérea. Poco después de denunciar con nombre propio a quienes presuntamente fueron sus aliados, alias 'Daniel' fue envenenado en la cárcel La Picota. Ricaurte Soria, alias 'Orlando Carlos' y segundo al mando del Bloque Tolima, no hizo acusaciones personales pero confirmó en su versión libre la implicación de los militares. Dejó registrado en el expediente: "Todas las operaciones se realizaban con información militar". No hay registros de apertura de investigaciones contra miembros de las fuerzas armadas por estas acusaciones, pero el portal Verdad Abierta reporta que la

Unidad de Justicia y Paz documentó que en la zona se usaba, como en otras regiones, la estrategia de reclutar militares retirados que les ayudaran con su conocimiento de la zona y los vincularan con aquellos que los habían reemplazado.

También los ‘paras’ estaban sujetos a la crueldad misma de sus comandantes, que ya habían alcanzado niveles extremos de insensibilidad. Tal fue el caso de ‘Gurre’, el líder del FOI, de quien el mismo Ramón Isaza afirma que se salió de control. Reaccionaba violentamente a cualquier cosa que le molestara, incluso ordenando asesinatos y torturas por pura diversión. Varios de los miembros de Asopema entrevistados hablan de que ordenaba a vecinos ruidosos a trabajos forzados y que alguna vez mandó a matar a unos jóvenes porque se robaron unos mangos de su finca.

Con toda esta red armada, los paramilitares procedían a acabar con cualquier movilización social que pudiera darse. Cualquier manifestación campesina se cortaba de raíz, sin dudar, el líder era el primero asesinado. Ese era el mensaje que se le dejaba a la gente, la impresión de que seguir adelante les aseguraría el mismo destino. Unas cuantas organizaciones que funcionaban desde la capital del departamento, como las ya mencionadas Sembrar y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSP), intentaban hacer talleres de derechos humanos, concientización política y promoción de la dignidad campesina. Pocos se animaban a ir.

Isabel Cristina Pardo, quien también hace parte del FCSP, cuenta que la asistencia fue disminuyendo hasta que no llegó nadie. Finalmente, su actividad en la región fue suspendida cuando comenzaron a aparecer colaboradores muertos. Cuenta que miembros del Ejército se le acercaron en ocasiones para pedirle sus documentos y los temas que trataban en las reuniones. Los campesinos también le decían que eran interrogados sobre por qué habían asistido. Después de suspender sus visitas en las veredas, Isabel Cristina fue personalmente amenazada, recibiendo llamadas y correo insultante en su oficina de Ibagué. Tuvo que exiliarse en España por dos años después de sospechar que estaban escuchando sus conversaciones telefónicas. Así, con la intimidación a la población, la destrucción del trabajo comunitario y la complicidad de las instituciones, los paras se tomaron el norte del Tolima.

El escape de la tierra

Cada víctima fue marcada por la violencia de manera particular. Para Germán Bedoya, la llegada de los paramilitares lo separó definitivamente de su tierra y le quitó la confianza que había ganado con la lucha campesina de los noventa. Es reacio a hablar de sí mismo. “Yo cuento sobre Asopema, así se entiende lo que viví yo”, explica. Él estuvo presente

desde la primera manifestación en Líbano y fue escalando posiciones hasta ser uno de los líderes de la organización.

Para él, el primer gran signo de la cercanía del conflicto fue la masacre de 'La Parroquia', que se gestó a lo largo de dos meses. Murieron siete personas y cuatro terminaron desaparecidas, casi todos de una misma familia. A las víctimas les habían requisado las casas y eran acosados y requisados constantemente por el Gaula y el Batallón Patriotas de la VI Brigada del Ejército. Allanaron sus casas sin orden judicial y los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla.

Entre los acosados se encontraba Germán, entonces presidente de Asopema, a quien constantemente le pedían sus documentos cuando se desplazaba de algún lado a otro. Los miembros del Batallón Patriotas insinuaron que era guerrillero y cuando les preguntó por el motivo de tanta instigación a pesar de tener los papeles en orden, contestaron intimidantemente: "Nos vemos despuesito".

Los primeros allanamientos se dieron en mayo de 2001, y para junio desaparecieron dos campesinos familiares de una miembro de la junta directiva de Asopema. Un par de días después, la hija de una madre comunitaria y su esposo fueron sacados del balneario que administraban.

Ante esta situación, conocidos y familiares emprendieron una desesperada búsqueda. El 16 de julio, comunicaron al DAS y la Fiscalía que iban a crear un grupo para encontrarlos entre los municipios de Fresno y Mariquita y pidieron ayuda. Allí les dijeron que fueran solos, que el área era segura. Las siete víctimas emprendieron su viaje en una camioneta y en la mitad del camino fueron interceptados y asesinados. Murieron tres hermanos de apellido Parra, que buscaban a su hermano, y la madre comunitaria Isabel Gúzman, que había perdido a su hija.

Bedoya veía cómo aumentaban las amenazas en su contra. Llamaban a altas horas de la noche a decirle obscenidades y a ponerle plazos para irse. Ya después de ver cómo terminaron sus conocidos en 'La Parroquia', cambiaron las cosas para él. Antes decía que no habría forma de hacerlo salir de su tierra. Creía que no iba a dejarse derrotar. Pero llegó al punto en que ya las cosas se tornaron dramáticas.

Los 'paras' perpetraron la masacre de Frías, en el municipio de Falan, apenas dos meses después. Quince personas murieron, incluyendo dos niños. Varios testimonios decían que la Policía se había ido de la plaza principal de este corregimiento, liberando el camino para que el FOI llegara a disparar indiscriminadamente a los campesinos que departían en los locales comerciales. Según dicen, esa mañana la guerrilla había desayunado en esa misma zona comercial. Esa fue la retaliación.

Bedoya quiso ser más astuto que sus perseguidores. Intentó engañarlos y volvió después de recibir el ultimátum para irse. “Me vine a Bogotá y a la semana volví, ellos no me habían dicho que no podía volver”, cuenta. Pero pronto la situación se hizo insostenible. Le llegó otro golpe cercano con las masacres conocidas como la de los “Cazadores y los Pescadores”. En enero de 2003, se llevaron a seis pescadores, tres de los cuales eran menores de edad, a la finca San Jorge de Armero Guayabal. Alias ‘Gurre’ confesó que fueron retenidos por el Ejército, que luego se los entregó. Fueron degollados y dejados en fosas comunes. Dos semanas después corrieron con la misma suerte once cazadores, que incluían a un concejal de Falan y a una mujer, que se determinó fue abusada sexualmente antes de ser asesinada. Los hechos ocurrieron en la misma finca. En esa fosa común apareció Héctor Parra, el desaparecido al que buscaban cuando ocurrieron los hechos de ‘La Parroquia’.



Germán Bedoya, trabajando como líder de la CNA.

Ya con esto, Germán Bedoya se estableció en Bogotá. Desde allí vio cómo Asopema terminó desmantelada y que sus antiguos colaboradores prefirieron dejar de lado su lucha campesina. Él, en cambio, fue recibido por la Coordinación Nacional Agraria, desde donde ha expandido su trabajo social a otras regiones como el Chocó. Todavía mantiene sus vínculos con el Tolima, donde ha apoyado la creación de Asacol, una organización que ha tratado de retomar el trabajo de Asopema. Nunca se registró como víctima ni como desplazado, pues considera que nunca lo despojaron de nada. Vuelve regularmente y asegura que jamás cortará sus vínculos con su tierra.

La muerte del amigo

Amanda Soto hoy es la memoria histórica de Asopema. Con su hablar pausado repite las veces que sea sus experiencias llenas de nostalgia por la unión campesina que alivió sus sufrimientos económicos durante la crisis cafetera. Unos recuerdos felices que vio manchados por la violencia que los precedió. Ella es la enciclopedia que retoma cómo después de tanta dicha vino la decepción de las promesas incumplidas y el posterior exterminio de los miembros de Asopema.

Tal vez la historia que más la conmueve es la de Lucas Galindo, uno de sus amigos más cercanos. Ella se había encargado de cuidarlo, pues estaba bastante enfermo debido a su avanzada edad. A pesar de sus propias dificultades, solía hacer una larga caminata de dos horas para irlo a visitar y acompañarlo en la soledad de su finca.

El día de su muerte, Amanda iba a ir a visitarlo y pasar allí la noche. “Me puse a hacer vueltas y cuando vi, ya se estaba poniendo oscuro, entonces no fui”, recuerda. Al otro día recibió la dura noticia de que habían llegado a sacar a su ‘Luquitas’ de su cama y lo dejaron abaleado en el camino. “Si hubiera alcanzado a llegar probablemente me habría pasado lo mismo”, cuenta. Después de eso, tuvo que salir de su tierra en la vereda. Se estableció con sus hijos en el casco urbano. Uno se aventuró a volver al campo, pero ella se quedó. De vez en cuando la contactan periodistas, sociólogos y científicos sociales que buscan entender el sufrimiento campesino desde la crisis cafetera.

La pérdida del hogar

Los malos recuerdos de Yohana Castaño se asocian más con la pérdida de los lugares que amaba en su infancia. Su familia tenía tierras en el corregimiento de Tierradentro en Líbano y solía pasar fines de semana y vacaciones en la finca que allí tenían. Mantenía además una memoria nostálgica de Santa Teresa, donde pasó sus primeros cinco años, los únicos en que tuvo a su madre.

Cuando se establecieron los paramilitares, las cosas cambiaron. Los paseos se tiñeron de sangre. “En esos viajes fue cuando vi por primera vez un cuerpo tirado en medio del camino, lo cual pronto se convirtió en parte del paisaje”, dice. Aquellas víctimas sin nombre fueron su principal motivación para interesarse en el trabajo social. No podía dejarlos allí sin entender por qué debían soportar esa violencia y considerarla algo cotidiano.

Las vacaciones se tornaron en una pesadilla. Les comenzaron a pedir que informaran de cuándo iban a ir, les ponían horarios de llegada y salida. Tuvieron que ser testigos silenciosos de las borracheras de comandantes, de cambios abruptos de las reglas

impuestas y el sentimiento de estar en constante peligro. Poco a poco dejaron de ir y allí se quedó la casa que tanto habían querido.

Se graduó de bachiller y decidió dedicarse a la lucha social. Estuvo en Bogotá y trabajó en otras regiones muy violentas como los Montes de María. Volvió de nuevo a ser activista en su tierra para 2008, pero nunca pudo volver a Tierradentro. “Estuve allí y fue incómodo, como si lo hubieran acabado”, cuenta. “Hoy está completamente repoblado. Todos son costeños, gente que vino con el FOI. Es otra cultura, una nueva forma de vida. No queda nada de lo que conocía”.

Sus logros como líder la llevaron a ser parte del Congreso de los Pueblos, una confederación de grupos sociales. Desde allí ha fomentado la organización de los campesinos en el norte del Tolima. Congregar a la gente ha sido complejo, pero se ha logrado lentamente retomar las actividades sociales y la movilización en contra de proyectos de megaminería que ponen en riesgo los recursos naturales de la región.

Hoy se enfrenta a consolidar una nueva organización que debe tratar de unir un tejido social completamente destrozado. El duro pasado les dejó la ventaja de tener lecciones aprendidas que les dan herramientas para no estar tan indefensos frente a los actores armados. “El tema de la ignorancia campesina es un mito. Ellos son muy conscientes de lo que está pasando política y socialmente y hoy saben cómo pueden ellos transformar esa situación”, agrega Yohana.

La comunidad en medio de la guerra

Entre tantas tragedias y entorpecimientos de la actividad campesina, prosperaron intentos de resistencia, incluso ante la impotencia de la sociedad civil frente el enorme poderío de los grupos armados. En la vereda La Esmeralda, de Villahermosa, una iniciativa campesina logró sobrevivir hasta hoy, pese a la amenaza de los violentos. La Tienda Comunitaria fue creada a finales de los años noventa por Ángel Rodríguez, un campesino de más de sesenta años que había dedicado grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de su comunidad.

Don Ángel, como todavía lo llaman, tomó varios cursos de políticas públicas y se preparó en talleres para poder reclamar los derechos de su gente. Creía que era fundamental que el Estado les diera salud y educación, a pesar de estar alejados del casco urbano. Sacó adelante a sus cinco hijos y a todos les dio educación superior. Una de ellas, Blanca, se convirtió en auxiliar de enfermería para hacerse cargo del centro de salud de la vereda.

Con mucho esfuerzo, Ángel unió a los campesinos para encontrar un espacio para una escuela e hizo gestiones con la Alcaldía para traer profesores. Era un personaje admirado y

muy querido por la comunidad. Era también miembro de Asopema. Armando Vivas, hoy presidente de la Tienda Comunitaria, lo recuerda como un hombre amoroso que estaba convencido de que vivir en el campo no tenía que representar una peor calidad de vida.

En la crisis cafetera, La Esmeralda se encontró en una situación de miseria agobiante. El corregimiento se encuentra bastante alejado del casco urbano, unido por una única vía en pésimo estado. No hay tiendas para comprar productos de la canasta familiar. Para conseguirlos, así como para vender sus cosechas, se deben asumir los costos y tiempos de llegar a Villahermosa e incluso hasta Líbano.

A Ángel se le ocurrió que entre todos podían mitigar la difícil situación trabajando como comunidad para contar con lo básico por un menor precio. Así es que fundó la Tienda Comunitaria, un lugar en el que los campesinos se asociaban para hacer trueque de sus cultivos. Intercambiaban sus productos y entre todos planeaban un viaje único al pueblo, en el que vendían el resto de la cosecha y traían lo que no se conseguía en la vereda. Lograban reducir el tiempo que perdían en el trayecto, se rotaban las tareas y ahorran gastos. Levantaron una pequeña casa para almacenar de los productos.

Llegaron los paramilitares y como era su modus operandi, empezaron a preguntar por la Tienda Comunitaria. Estaban buscando nombres, quiénes la manejaban, preguntaban por el dueño. Entre todos acordaron no señalar a nadie, mantener la boca cerrada. Sin embargo, el liderazgo de don Ángel era más que evidente. Los vecinos de La Esmeralda sabían que tarde o temprano vendrían por él.

La familia Rodríguez intentó sin éxito convencerlo de irse de La Esmeralda. Había aceptado irse con otro de sus hijos pero siempre aplazaba el viaje. Hasta el último momento paseó tranquilo por su pueblo. Su lema era: “Yo no tengo por qué tener miedo si nunca he hecho algo malo”.

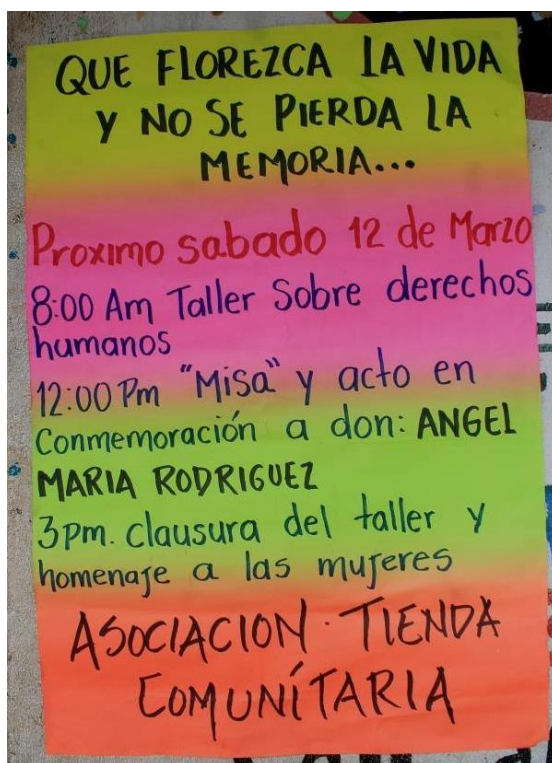
Un grupo de soldados llegó buscándolo a la casa de su hija Blanca. Ella les dijo la verdad, que no lo había visto. Los militares le recordaron que era mejor que se fuera, con una frase macabra: “Usted sabe que detrás de nosotros viene la escoba que más barre”. No tardaron en cumplir esa amenaza.

El 3 de marzo de 2004 asesinaron a don Ángel. Esa mañana llegaron muy temprano a tocar violentamente las puertas, llamándolo por su nombre completo. Él había madrugado a llevarle una vaca a su hija, y los paramilitares lo interceptaron en medio del camino. Su esposa fue testigo de la escena. “Él no parecía ni preocupadito, pobrecito. Les dijo su nombre y con mucha decencia hasta les extendió la mano”, cuenta la mujer entre sollozos. Se lo llevaron amarrado.

Blanca insistió en buscar a los hombres que se habían llevado a su padre. Pidió a los que dejaron como vigilantes que intercedieran por Ángel, pero era tarde. Se oyeron gritos a lo lejos y después escucharon el sonido de varios disparos. Los Rodríguez entendieron que ya no había nada por hacer. Al otro día encontraron el cuerpo tirado en el camino.

Blanca Rodríguez dice que un par de semanas después se le acercó en el pueblo un soldado. Ella no lograba ubicar de dónde lo conocía. “Buenos días, mona”, le dijo, “¿No me diga que no se acuerda de mí?”. Ella le dijo que no lo recordaba. “Yo estuve allí, por su casa, el día que mataron a su papá”, sentenció. Blanca insiste en que no entiende cómo una persona pudo sin ninguna pena alardear sobre su participación en un crimen, más como miembro de la fuerza pública.

A pesar del duro golpe de la muerte de Ángel, los campesinos lograron mantener en pie la Tienda Comunitaria. Los ‘paras’ afortunadamente incumplieron su promesa de tumbar la casa en la que funcionaba y aunque mermó su actividad, pudieron seguir adelante hasta hoy. Incluso, la Alcaldía decidió encargarse de su funcionamiento, lo cual ha sido rechazado por la comunidad, que alega malos manejos.



Programa del homenaje de 2016 a la memoria de Ángel Rodríguez.

Otro gran logro de la Tienda Comunitaria es la preservación de la memoria de Ángel Rodríguez. Su familia y amigos se han empeñado en conmemorar su legado y mantener presente sus enseñanzas. Es uno de los pocos ejemplos en la región de ejercicios de

memoria que se han mantenido constantes a través del tiempo. Cada aniversario de su muerte se realiza un evento que celebra sus logros, en el que participan sus nietos y bisnietos, muchos de los cuales no alcanzaron a conocerlo y hablan de él como si nunca los hubiera dejado.

La vida después

El proceso de Justicia y Paz sentó a los grupos paramilitares con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para negociar su desmovilización. El Bloque Tolima se entregó en octubre de 2005. En la ceremonia, 207 hombres dejaron apenas 51 armas. Declaraciones de 2012 de alias 'Lucas', desmovilizado, han confirmado que este fue uno de los casos en los que se exageró el número de combatientes, según él, por una alianza entre alias 'Daniel' y el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. El FOI se desmovilizó como parte de las ACMM, comandadas por Ramón Isaza, a principios de 2006, con casi mil combatientes. Restrepo está siendo investigado por estos señalamientos y se desconoce su paradero.

Las negociaciones significaron una disminución en las cifras de asesinatos y desplazados, pero de nuevo volvieron a niveles similares a los que estaban después de las desmovilizaciones. El motivo es que los vestigios de los frentes paramilitares volvieron a enfrentarse entre sí para repartirse el territorio que quedó. La falta de una jerarquización entre los desmovilizados facilitó un aumento de la violencia, que también coincidió con un esfuerzo para terminar por fin con la presencia del ELN.

La llegada del gobierno Santos trajo también el desmantelamiento del frente Bolcheviques del Líbano del ELN. Este lleva cinco años desde que el Ejército lo declaró como desarticulado, aunque se han presentado hechos que dan cuenta de las posibles intenciones de recuperar su presencia en la zona. Medios locales han reportado que panfletos a nombre de este frente aparecieron en el norte del Tolima en 2014, amenazando a líderes del Centro Democrático como Paloma Valencia y Álvaro Uribe, además del actual gobernador Óscar Barreto. En Villahermosa se dio una amenaza más puntual en 2015, que declaraba como objetivo militar al alcalde del momento, Evelio García. La amenaza se extendía también a varios líderes comunitarios de la zona.

Según la fuerza pública, la autoría de estas acciones no se puede atribuir al ELN, ya que no corresponden con el tipo de amenazas que ellos solían hacer, y no hay evidencia de un resurgimiento del grupo guerrillero en la zona. Sin embargo, en 2014 se capturó a Hermes Zapata alias 'Popeye' y Diómar Bárcenas alias 'Láin', jefes 'elenos' que estarían buscando reagrupar el frente Bolcheviques del Líbano. El portal tolimense A la luz pública explicó que al parecer el Comando Central, que estaría operando desde Venezuela, pretende

recuperar su presencia en la zona, reclutando de nuevo a los simpatizantes que allí mantienen.

Lecciones aprendidas

Con respecto a la participación de las víctimas en Justicia y Paz, la respuesta ha sido en general pobre. El tribunal que lleva el caso ha tenido muchos problemas para convocar a la gente para que cuente lo que tuvo que sufrir. El proceso, que originalmente tenía sede en Bogotá, fue trasladado a Ibagué por la falta de denuncias. Incluso, en 2015, los magistrados sesionaron directamente en Lérida y Guamo, haciendo convocatorias por medios de comunicación para que las víctimas se animaran a colaborar. Isabel Cristina Pardo, del Movice, atribuye la falta de participación al miedo y la falta de confianza en el Estado. “Los desmovilizados que no fueron encarcelados se quedaron en la zona y así no estén delinquiendo, su sola presencia hace temer represalias si se atreven a hablar”, cuenta. Agrega que otro aspecto es la desconfianza en la justicia: “En cierta forma piensan que no tienen por qué colaborar con aquellos que no les cumplieron”, explica.

La búsqueda de verdad también ha sido condicionada por las irregularidades con el proceso contra los colaboradores de los paramilitares. Ningún militar o empresario ha sido imputado. Hay políticos a los que se investigó pero nunca avanzaron los procesos y a los condenados salieron muy pronto, como Luis Humberto Gómez Gallo, u hoy ejercen el poder a través de otras personas, como Emilio Martínez. Alias ‘Daniel’, el único paramilitar que hizo acusaciones puntuales y dio nombres de aquellos que los apoyaban, fue asesinado. A partir de eso, las declaraciones se hicieron vagas y aunque confirmaron vínculos de políticos, militares y empresarios, nunca llegaban a atribuir pruebas necesarias para emprender procesos en contra de ellos. “No se han visto hechos concretos de reparación, así que las víctimas piensan que no hay valor en denunciar”, añade Pardo.

La gente también teme reencontrarse con situaciones en las que terminó envuelta en las dinámicas de la guerra. No hablan porque en alguna ocasión fueron ellos los informantes, tienen familia que vivió de los paras, o acudieron a la guerrilla para buscar protección. Hay razones emocionales que les impiden revolver en el pasado. “Muchos simplemente se fueron, ya armaron otra vida y lo último que quieren es ponerse a revivir el pasado”, cuenta Germán Bedoya. “Ya el Tolima está tan lleno de dolor que no les queda nada allí”. Según él, lo último que quieren es volver a sentirse víctimas.

Los altos mandos de los bloques paramilitares están en la cárcel y reconocieron su responsabilidad por masacres, desapariciones, asesinatos, robos y extorsiones. La sentencia al Bloque Tolima registró a unas 770 víctimas, a partir de 24 declaraciones oficiales. Alias ‘Gurre’ del FOI, el otro grupo paramilitar, reconoció su participación en 50

asesinatos y 20 masacres en la región, que incluyen a las de Frías y La Parroquia. Ramón Isaza fue vinculado con 324 crímenes declarados como de lesa humanidad y se le atribuyen unas mil víctimas. Salió de la cárcel en enero de 2016, tras cumplir los ocho años de pena alternativa al que se sometía en el proceso, al igual que deben hacerlo 'Gurre' y los condenados del Bloque Tolima.

En la región hay temor por la presencia de bandas emergentes que se dedican a la delincuencia común, principalmente al microtráfico y las extorsiones. La forma en la que se maneje este problema será determinante para el futuro de la región. "A veces me da miedo porque se oye que la gente dice 'Esto no pasaría si estuviera la guerrilla', o los 'paras', dependiendo de quién lo dice", cuenta Isabel Cristina Pardo. En este momento el norte del Tolima se está ajustando a lo que quedó de la incursión paramilitar, desde una población completamente distinta, a la nueva organización campesina.

La agricultura se ha visto revitalizada, al igual que el trabajo social. Las organizaciones pudieron volver y hay de nuevo un trabajo comunitario para mejorar su calidad de vida. Están vinculados directamente con organizaciones a nivel nacional e incluso incursionaron en la política. Se han dado cuenta de que pueden existir dentro de la institucionalidad. Gracias a su organización han logrado ser parte de juntas de acción comunal, concejos, asambleas e incluso, con el trabajo aliado con el Polo Democrático, llevaron a Alberto Castilla, un líder campesino, al Senado. "Para el campesino es muy difícil llegar a verse representado, pues no es considerado una minoría que debe ser protegida, aunque en muchos sentidos lo sea", explica Yohana Castaño. Para ellos es un gran reto acceder a lo público, porque les cuesta mucho contar con los votos y la organización para posicionar candidatos. "Hoy afortunadamente están trabajando unidos para ser tomados en cuenta como comunidad ante las instituciones gubernamentales y de hecho ser parte de ellas", agrega.

El presente encuentra a la región de nuevo en la calma después de la tormenta. Esa calma que después de la revolución del 28 y La Violencia, dejó sembradas semillas para que se retomara de nuevo el conflicto y el desplazamiento. Así como hay sombras del pasado, también hay señales de nuevos vientos. La participación política de aquellos con visiones alternativas es una realidad, así sea en medio de muchos obstáculos. Por primera vez ha avanzado un proceso de paz con las Farc. Hay un interés de aclarar el pasado y entender las raíces del conflicto, con miras a evitar escenarios de repetición. Más importante aún, hoy se habla de verdad y de memoria, por fin dejando de lado la negación de la violencia.

Anexo

Título: La historia se repite en el norte del Tolima

Modalidad: Reportaje periodístico

Sinopsis: Se identificaron tres grandes momentos de conflicto en el norte del Tolima en los últimos cien años: la revolución de los Bolcheviques del Líbano, la época de La Violencia y la incursión paramilitar a principios de este siglo. Tras comenzar la investigación, lo más relevante fue encontrar que en los tres principales brotes de violencia coincidían varios factores a pesar del paso del tiempo. Las grandes expresiones violentas, que cobraron sobretodo vidas civiles y deterioraron el tejido social, tenían en común que estuvieron precedidas por la agitación de la protesta campesina, la complicidad del Estado con grupos armados para que esta cesara y el posterior abandono de los sobrevivientes. En los tres momentos se dispararon los índices de desplazamiento, los asesinatos selectivos y masacres y el abandono de tierras. Los actores armados, de todos los bandos, adoptaron prácticas crueles e inhumanas, buscando generar un estado de miedo e incertidumbre. Finalmente, los ganadores resultaron ser grandes terratenientes que se apoderaron de las tierras para explotar su potencial agrícola y minero. Después de la agitación del conflicto no se han resuelto las problemáticas sociales que lo originaron, lo cual ha propiciado que vuelvan a generarse rencores que se manifiestan de forma violenta. El proceso de Justicia y Paz y las negociaciones de paz con las Farc han puesto sobre la mesa temas como la reconciliación y la búsqueda de la verdad, que plantean una mejor resolución del conflicto y la regeneración del tejido social. Sin embargo, los procesos de reparación de las víctimas de paramilitares han estado plagados de obstáculos que entorpecen las buenas intenciones de los últimos procesos de paz.

Objetivos:

General

- Realizar a manera de reportaje un recuento de los aspectos históricos del conflicto en el norte del Tolima

Específicos

- Entender qué papeles jugaron los diferentes actores del conflicto en la región
- Dar cuenta del impacto social que generó la violencia en la zona
- Indagar sobre los procesos de reparación y verdad en la región tras la aplicación de la Ley de Justicia y Paz
- Analizar los alcances de Justicia y Paz en el norte del Tolima

- Ver cómo los antecedentes históricos dieron paso a prácticas violentas y desplazamiento

Justificación: Los hechos violentos en el norte del Tolima han sido documentados por medios locales y nacionales. Incluso el aumento en picos de violencia ha sido resaltado por ONG como Sembrar y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Sin embargo, no se encuentran trabajos que tengan un hilo conductor entre la presencia de grupos armados con las particularidades sociales y políticas de la región.

Detrás de los asesinatos selectivos y los desplazamientos masivos hay un interés por controlar tierras con un valor estratégico para el acceso al centro del país. Esto es algo que ha causado conflictos desde principios de siglo, que parecen repetirse con nuevos actores. Entender ese trasfondo es clave en un momento en el que se está planteando el posconflicto.

El caso del norte del Tolima es uno en el que fracasó la Ley de Justicia y Paz, pues poco se logró esclarecer de los crímenes cometidos por los paramilitares. Existe hasta hoy un miedo en las víctimas a la hora de denunciar y las sentencias a desmovilizados no resultaron en procesos de reparación. A pesar de esto, el planteamiento de la búsqueda de verdad, la reconciliación y la reparación de las víctimas muestra una nueva forma de seguir adelante en la que hay cabida para la reconstrucción del tejido social con mayor protección del Estado. Lo ocurrido en esta región ejemplifica el problema de las violencias colombianas y al mismo tiempo sirve para encontrar nuevas alternativas de resolución para evitar la repetición del conflicto.

Métodos de investigación: El reportaje se construyó a partir de la documentación histórica de los hechos violentos de la región del norte del Tolima. De ahí salieron los tres grandes brotes de violencia descritos en el trabajo, a partir de la reconstrucción en la prensa y después, con informes de investigación y diagnóstico de entidades estatales como la Presidencia de la República y ONG como la MOE y Acnur. La reconstrucción de los hechos de 1928 se da más a partir de la recolección histórica del ELN y los entrevistados de la zona. Con respecto a lo ocurrido durante La Violencia, la reconstrucción se realizó mayormente a partir de *La Barbarie en el Tolima*, de Víctor Prado, que recopila los hechos denunciados formalmente durante ésta época. El libro *Bandoleros, gamonales y campesinos*, una de las obras más representativas sobre este momento histórico fue crucial para determinar la importancia de la región del norte del Tolima en el conflicto colombiano. El texto de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens dedica un capítulo a los grandes bandoleros, que se gestaron principalmente en esta zona. Sobre la incursión paramilitar de principios del siglo XXI se encontraron varios registros individuales de

prensa sobre acciones violentas de la región, que al recopilarse dan cuenta de la escalada del conflicto y la sistematización de los crímenes paramilitares. Los registros después de la desmovilización de las autodefensas comienzan a dar cuenta de la dimensión de lo ocurrido y sus consecuencias para la población civil. Sitios especializados, como Verdad Abierta, comenzaron a describir a grandes rasgos la formalización de los grupos armados en la región y sus vínculos con narcotraficantes, políticos y empresarios. También se consultaron las condenas del Bloque Tolima y el Frente Omar Isaza. Ya con un panorama de lo sucedido en la región, se hizo claro que hacía falta la versión de las víctimas, no había una claridad sobre el impacto que tuvo el conflicto en la vida cotidiana del norte del Tolima. Así que se buscó que ellos contaran desde su perspectiva lo ocurrido, en especial cuando se denunciaba una falta de participación en los procesos de búsqueda de la verdad. Los principales personajes son Germán Bedoya; expresidente de Asopema, la mayor organización campesina del norte del Tolima que fue exterminada por los paras; Amanda Soto, una campesina de Líbano que hizo parte del movimiento campesino y vio morir a sus compañeros y Yohana Castaño, que creció en la región y se dedicó al trabajo social por su tierra desde el Congreso de los Pueblos. Se hizo reportería durante un evento de conmemoración en la vereda La Esmeralda de Villahermosa, en la que se recordó a Ángel Rodríguez, líder campesino asesinado en 2004. Otra fuente importante fue Isabel Cristina Pardo, que ante la gran afluencia de víctimas se encargó de representar en el Tolima al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que gracias a sus archivos tiene las denuncias que a través de los años hizo la fundación para alertar sobre la amenaza paramilitar.

Bibliografía

Acnur. *Diagnóstico departamental Tolima*. Bogotá, 2013.

Centro Nacional de Memoria Histórica. *¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad*. Bogotá: Pro-Off Set, 2013.

Gobernación del Tolima. *Plan integral único del Tolima (Piut)*. Ibagué, 2014.

Meertens, Donny y Sánchez, González. *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia*. Bogotá: El Ancora Editores, 1983.

MOE. *Monografía Político-Electoral departamento de Tolima 1997 a 2007*. Bogotá, 2008.

Nuñez, Magda Paola. *Contexto de violencia y conflicto armado*. Observatorio de Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris.

Prado, Víctor. *La Barbarie en el Tolima Tomos 1 y 2*. Ibagué: León Gráficas Ltda, 2012.

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Panorama actual del Tolima. Bogotá, 2005.

Unidad para la Integración y Reparación Integral a las Víctimas. *Tolima: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012*. Bogotá, 2012.

Uribe, María Victoria, *Matar, rematar, contramatar, las masacres de la violencia en el Tolima 1948-1964*, Bogotá, Cinep, Controversia N° 159-160, diciembre 1990.

Uribe, María Victoria. *Violencia y masacres en el Tolima: desde la muerte de Gaitán al Frente Nacional*. Bogotá, Revista Credencial Historia N° 18, junio de 1991.

Varios autores. *Para vencer el miedo. Respuestas a los impactos de la guerra en el centro y sur de Colombia entre 1980 y 2010*. Ibagué: Editorial Universidad del Tolima, 2012.

Archivos personales de Germán Bedoya, Yohana Castaño Movice y FCSPP

Archivos

- Verdad Abierta
- Revista Semana
- El Tiempo
- El Espectador
- El Nuevo Día
- A la luz pública
- Unidad de Justicia y Paz

Entrevistas principales

- Isabel Cristina Pardo. 24 de febrero. Ibagué, Tolima.
- Alirio Duque. 25 de febrero. Ibagué, Tolima.
- Pacífico Abella. 2 de marzo. Cali, Valle.
- Amanda Soto. 11 de marzo. Líbano, Tolima.
- Blanca Rodríguez. 12 de marzo. Vereda La Esmeralda, Villahermosa, Tolima.
- Germán Bedoya. 17 de marzo. Bogotá.
- Yohana Castaño. 24 de marzo. Ibagué, Tolima.